



*Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción*

**CONTESTA TRASLADO. SE DECLARE INADMISIBLE EL  
RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL**

**Excma. Sala III**

**de la Cámara Federal de Casación Penal:**

**LAURA ALONSO**, Secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (decreto n° 252/2015, B.O. 29/12/2015), y **Tamara Pavlovsky**, abogada de este organismo en la **causa n° 9862/2012/2/1/C** caratulada: **"Liuzzi Carlos Emilio y otros s/ enriquecimiento ilícito"**, de los registros de esa Sala III, nos presentamos ante VV.EE y respetuosamente decimos:

Que habiéndose corrido traslado del recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Carlos Emilio Liuzzi, Thais del Corazón de Jesús Hidalgo, María Luján Liuzzi, Carlos Marco Liuzzi y Gloria María Eugenia Martínez en esta causa, procedo a contestarlo y a solicitar su rechazo, por cuanto considero que es inadmisibile, ya que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal.

**I) LOS AGRAVIOS DEL RECURRENTE.**

La defensa pretende la admisión de su recurso extraordinario por los siguientes argumentos:

1.- La decisión que la agravia implica una afectación directa a la cosa juzgada formal y material, porque se decidió anular una

pieza procesal pasando por alto una sentencia firme y consentida por quien tenía derecho de recurrirla.

2- Por esa razón, sostiene la pertinencia al caso de jurisprudencia de la CSJN y de la Cámara de Casación que cita, según la cual, el recurso puede proceder aun cuando no se dirija contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, si lo que se cuestiona es la afectación del *non bis in idem*. (Fallos 314:377; 315:2680; 314:377; 321:328:331:1774)

3.- En relación a ello, sostiene que la decisión de continuar con un proceso que ya tenía sentencia firme vulnera este derecho convencional. Al respecto señala: *“la decisión de negar el tratamiento de esta afectación convencional es radicalmente arbitraria y la razón (y sus citas) son inaceptables por la extensa y reconocida doctrina judicial frente a la afectación del non bis in idem”*.

4.- No obstante que el agravio central está constituido por una cuestión ritual, cita precedentes de la CSJN (“Perazzo, María”; CFCP “Ríos Héctor” y “Servetti de Mejías, Julia”) según los cuales *“...si bien las cuestiones relativas a la interpretación de las normas procesales son ajenas al recurso extraordinario, cabe hacer excepción a este principio cuando la aplicación de tales preceptos excede de una manera irrazonable los límites que impone el respeto de la garantía de la defensa en juicio”*.



**Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción**

## **II) EL RECURSO EXTRAORDINARIO ES INADMISIBLE.**

El recurso intentado no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, que dirima una controversia, poniendo fin al pleito o impidiendo su continuación, ni causa un gravamen de imposible, insuficiente o tardía reparación ulterior, de acuerdo con el artículo 14 de la ley 48.

En este sentido, vale la pena tener en cuenta que autorizada doctrina tiene dicho que: *"Las resoluciones cuya consecuencia es la obligación de seguir sometido a proceso criminal no satisfacen como regla el requisito de ser sentencia definitiva, pues no ponen fin al proceso ni impiden su continuación."* (Bianchi, Alberto B., *La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario*, Ábaco, Buenos Aires, 1998, p. 130, y sus citas).

Tampoco advertimos que se verifique la concurrencia real de una hipótesis de arbitrariedad que habilite la descalificación de la resolución que se pretende impugnar. Es de aplicación, a nuestro juicio, la doctrina de la CSJN según la cual *"...la doctrina de la arbitrariedad tiene carácter excepcional e impone un criterio particularmente restrictivo para analizar su procedencia. Lo contrario importaría abrir una nueva instancia ordinaria en los casos en que las partes consideren equivocadas o desacertadas las decisiones de los jueces de la causa, lo que resulta ajeno a la naturaleza del recurso (fallos 285:618 y 420; 290:95; 291:572; 302: 1564; 304:267 y 375; 308:2406)"*.

Tampoco brindan razones suficientes para apartarse de esos criterios, el contenido de los precedentes citados por el pretense recurrente, ya que ellos obedecen a hipótesis diversas de la presente.

Por caso, en fallos 315:2680, re “Lucas, Santiago Márquez y otros”, la CSJN fundó su decisión de una real afectación a la garantía de la cosa juzgada formal, al exponer que: “...como se recordó en el caso de fallos 308:84, la autoridad de cosa juzgada constituye uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica y debe respetarse, salvo los supuestos en que no haya existido un auténtico y **verdadero proceso judicial** puesto que aquella supone la existencia de un juicio regular donde se ha garantizado el contradictorio y se ha fallado libremente por los jueces” (ver considerando 6º del fallo 315:2680).

Es decir que la citada decisión obedeció a un caso en el que se había verificado un verdadero proceso judicial, lo que no se comprueba en las presentes actuaciones. La cosa juzgada presupone no sólo juicio y sentencia, sino, muy especialmente, juicio regular y sentencia válida, ambos presupuestos del juicio previo.

En nuestra presentación en los términos del art. 465 del CPPN hicimos referencia a las deficiencias de la decisión adoptada, a las medidas oportunamente sugeridas por el perito oficial y que hubieran permitido tener un panorama completo del enriquecimiento de Liuzzi y su entorno, como así también a las múltiples medidas de prueba que restaban efectuarse. La investigación fue pobre, sesgada y orientada a cerrar esta causa cuando no debía serlo. Esto puso en evidencia, además el sentido que tiene para este organismo ser querellante en la causa, para promover un proceso conforme a derecho.



**Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción**

La actuación del magistrado instructor frustró una intervención **eficaz**, tanto de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas como de la Oficina Anticorrupción, a fin de intervenir adecuadamente en la investigación, juzgamiento y eventual condena de un hecho de corrupción, como es el enriquecimiento ilícito de un funcionario público, violando las normas previstas en los artículos 20 y 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ley 26.097)<sup>1</sup>, como así también, las normas que regulan la intervención de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (art. 45, inc. c), ley 24.946) y de esta Oficina Anticorrupción (art. 13, ley 25.233 y decreto 102/99).

A diferencia de lo que señala el letrado defensor, no hay una afectación al valor de la cosa juzgada. La intangibilidad de las decisiones judiciales adquiere relevancia una vez agotados los recursos previstos en las normas procesales o en aquellas que prevén un mecanismo de control específico y diferenciado. En este caso, existe uno orientado a que haya más de una revisión de aquellas decisiones que impliquen la posible impunidad de graves hechos de corrupción, previéndose la intervención subsidiaria de otro órgano del Ministerio Público Fiscal respecto de la actuación del fiscal competente. De acuerdo a lo establecido en el art. 45, inc. c) de la ley 24.946, dicha actuación le corresponde a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y ello fue efectuado de

---

<sup>1</sup> Artículo 36. Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, se cerciorará de que dispone de uno o más órganos o personas especializadas en la lucha contra la corrupción mediante la aplicación coercitiva de la ley. Ese órgano u órganos o esas personas gozarán de la independencia necesaria, conforme a los principios fundamentales del ordenamiento jurídico del Estado Parte, para que puedan

una manera tal que se impidió una participación efectiva, soslayándose lo establecido en el art. 36 de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que establece, como ya se dijo, que esos órganos deben poder tener una intervención eficaz en esta clase de procesos.

Como ya se anticipara, la misma actitud asumió el juez federal respecto de la intervención de este organismo, al permitirle tomar acceso al expediente una vez cerrado. Tiene que quedar en claro, la atribución de intervenir en el proceso que corresponde a este organismo no se hace al efecto de efectuar un estudio *ex post facto* del trámite de tal o cual proceso de corrupción pública. Se lo hace a fin de tener una participación efectiva en el marco de una acción penal vigente. Cuando se tuvo conocimiento, a través de la prensa, de un cierre inminente de la causa, este organismo se presentó en él. La Cámara Federal se hizo eco de nuestras razones evitando la impunidad de Liuzzi y sus secundantes.

En este punto, la defensa en oportunidad de presentar el recurso denegado soslayó el sentido de un reciente fallo dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación relativo a la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los procesos de corrupción pública. Así, en *Fallos* 335:622 (caso “Moreno”), la Corte, con cita de lo señalado en su momento por el senador José Genoud en el debate parlamentario de la Ley Orgánica de Ministerio Público, hizo referencia a que “... *un principio muy importante en estos tiempos como lo es que toda investigación que se lleve a cabo contra funcionarios públicos o entidades que administran recurso del Estado Nacional debe ser comunicada a la*



**Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción**

*Fiscalía de Investigaciones Administrativas para que tome participación – no sólo conocimiento, sino intervención- en dichos procesos y, además, lleve adelante las actuaciones que corresponda”* (ver considerando 9° del fallo citado). Esta participación efectiva había sido soslayada en este caso. Esta interpretación es por otro lado plenamente compatible con la idea de intervención eficaz, prevista por el artículo 36 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, respecto de órganos especializados en la materia, concretamente la OA y la PIA.

En razón de lo expuesto, a juicio de esta querella, al haberse impedido una intervención eficaz tanto de la PIA o la OA, lo decidido nunca adquirió calidad de cosa juzgada, puesto que se violó abiertamente lo dispuesto en la Ley de Ministerio Público, la ley de creación de la Oficina Anticorrupción y el artículo 36 de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Todo lo expuesto demuestra que tal, como surge del considerando 6 ° del fallo citado, el trámite cuestionado no fue un auténtico y verdadero proceso judicial, tal como pretende la defensa

La Sala IIA. de la Excma. Cámara Federal, correctamente advirtió la situación y declaró la nulidad del auto de fs. 498, y todos los que fueron su consecuencia, incluyendo el sobreseimiento de Carlos Liuzzi (fs.499/535).

En todo caso, la vulneración del debido proceso, que ampara por igual a todas aquellas partes que intervengan –o pretendan hacerlo de acuerdo a la ley-, había damnificado a este organismo y a la PIA, al cercenárseles la intervención que les corresponde y evitar que ejerzan las atribuciones legalmente reconocidas.

Por esa razón, la Sala IIa. de la Excma. Cámara Federal cumplió la manda del artículo 168 del Código Procesal Penal, que establece que todo tribunal que advierta una causal de nulidad la debe procurar eliminar inmediatamente. Esta fue la postura coincidente de la PIA<sup>2</sup>. Esto último descarta el argumento de la defensa en relación a un inexistente silencio del Ministerio Público Fiscal.

En razón de todo lo expuesto, se desvanece la argumentación orientada a demostrar un exceso irrazonable en los límites que impone el respeto de la garantía de la defensa en juicio, tal como pretende hacer valer la defensa en su presentación.

Finalmente, tampoco parece tener sustento la queja de la defensa en punto al procedimiento adoptado por esa Excma. Cámara. En él, intenta demostrar una vulneración a su debida intervención. Sin embargo, por una parte, tuvo la posibilidad de expresar todo cuanto quiso; por otra, no ha señalado de qué modo el procedimiento sugerido pudo haber modificado la decisión (*pas de nulité sans grief*), con lo que no demuestra el perjuicio real y efectivo que requiere la sanción procesal.

En suma, todo lo argumentado no es más que una interpretación particular de normas de derecho común, que a nuestro juicio lo logra superar los estrictos límites del recurso extraordinario.

En razón de todo lo expuesto, considero que debe declararse inadmisibile el recurso extraordinario federal interpuesto por la

---

<sup>2</sup> <http://www.fiscales.gob.ar/corrupcion/la-pia-sugirio-medidas-de-prueba-en-la-causa-donde-se-investiga-a-carlos-liuzzi/> del 28 de julio pasado.



**Ministerio de Justicia  
y Derechos Humanos  
Oficina Anticorrupción**

defensa de Carlos Emilio Liuzzi, Thais del Corazón de Jesús Hidalgo, María Luján Liuzzi, Carlos Marco Liuzzi y Gloria María Eugenia Martínez.

Proveer de conformidad,

**Será Justicia.**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Tamara Pavlovsky'.

**Tamara Pavlovsky  
Abogada  
Oficina Anticorrupción**

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Laura Alonso'.

**LAURA ALONSO  
Secretaria de Ética Pública, Transparencia y  
Lucha contra la Corrupción  
Oficina Anticorrupción**

